

Ms.c. Elio Fidel López Velaz, Investigador del Departamento de América del Sur del Centro de Estudios sobre América

Apuntes para un estudio comparado de las crisis políticas de Venezuela y Colombia■

Un estudio comparado, entre dos procesos tan complejos como los que desde la perspectiva política viven hoy Venezuela y Colombia, difícilmente podría ser expuesto, incluso parcialmente, en tan corto espacio. Por otro lado, la volatilidad del ambiente político y la creciente imbricación del acontecer venezolano - colombiano en el ámbito de las relaciones internacionales, y viceversa, sugieren una exposición cuidadosa de nuestros puntos de vistas, expuestos aquí sin otra pretensión que contribuir modestamente a un debate cada vez más necesario en torno a la situación política de estos países.

Vinculados por numerosos nexos, geográficos, históricos, estructurales, en una larga y muchas veces conflictiva convivencia, estas dos naciones latinoamericanas ingresan en el nuevo milenio inmersas en convulsos y tensionantes procesos socio políticos, cuya internacionalización es ya un hecho en Colombia, y pudiese serlo, en el mediano plazo, en Venezuela. Enclavadas en el arco andino, Venezuela y Colombia pertenecen a un área geográfica de extraordinaria importancia para los intereses estratégicos norteamericanos, en la que han ocurrido la mayoría de las convulsiones sociopolíticas del subcontinente en los últimos años.¹ Paradójicamente, la riqueza natural y económica de estos dos países sudamericanos no ha logrado distanciarlos del estado de conflictividad y explosividad social que tipifica la región, identificada por la deformación estructural, la inequidad y la pobreza. Las condicionantes estructurales de las crisis políticas que hoy caracterizan el conjunto de países andinos se expresan, en Venezuela y Colombia, a pesar de sus peculiaridades, de forma contundente. El crecimiento de la pobreza, la marginalidad, la violencia, la corrupción, y la disgregación y enajenación sociales, entre otros

¹ Ecuador, Bolivia y Perú, han sido escenario de una reactivación de los movimientos sociales, las protestas populares, con destacado protagonismo de los pueblos indígenas, dando claras muestras del deterioro de la institucionalidad política existente en el área, y el estado de ingobernabilidad en el que subsisten las llamadas democracias andinas.

flagelos que han colocado en niveles de alta tensión sociopolítica a estos países, no pudieron ser paliados, en Venezuela y Colombia, por los altos ingresos derivados durante décadas de la exportación de sus vastos recursos naturales ni, en el caso colombiano, por los millonarios ingresos provenientes del narcotráfico.

Desde la perspectiva de sus sistemas políticos, la prolongadas crisis manifiestas durante las últimas décadas en estos dos países, se han visto asemejadas, entre otros factores, por el deterioro de la capacidad de articulación clientelar de intereses de sus maquinarias políticas hegemónicas, y de sus esquemas de monopolización y cooptación política. Se identifican también, estos procesos, por el impacto negativo que para sus amplios sectores populares representó la sustitución los viejos modelos socioeconómicos de corte desarrollista, por políticas de ajuste neoliberal, cuyas consecuencias han agravado el deterioro estructural de estos países.²

Los efectos sociales del crecimiento del PIB, y de cuanto indicador macroeconómico se expresó de forma positiva en las estadísticas venezolano - colombianas en la última mitad del siglo XX, se vieron distorsionados por la anomalías de sus modelos socio económicos, la falsedad de sus estructuras democráticas, y la profunda inequidad de la distribución.

En Colombia, el ancestral monopolio ejercido por el binomio liberal – conservador, como expresión de una estructura de poder y un dominio económico oligárquicos, representa un elemento fundamental para el análisis y la comprensión de la prolongada crisis política del país. Este elemento, si bien no lo explica todo, es una de las premisas fundamentales de la explosividad política y de la violencia social manifiesta durante más de medio siglo en Colombia. La alternancia política liberal conservadora, que algunos estudiosos han denominado generosamente democracia restringida, se reprodujo a sí misma durante desde 1957, cuando la creación del Frente Nacional de Colombia, primero Frente Civil, operó como una suerte de fórmula conciliadora de los grandes partidos tradicionales, supuestamente extendida a toda la sociedad. Esta extensión social del Frente traía incorporada en su concepción, y camuflada detrás de un discurso político grandilocuente, una predeterminación

² Citando a : Bobbio, Norberto: Estado, gobierno y sociedad. Contribución a una teoría general de la política. Barcelona (España), Plaza y Janes Editores. S. A., 1987. P. 38

política. Los colombianos, al nacer, tenían dos opciones, afiliarse a los liberales o a los conservadores.

El Frente Nacional, que fue concebido como un sistema de gobierno excluyente y discriminatorio, garantizaba la usurpación perpetua del poder por parte de los grupos y las ideologías dominantes, lo cual colocaba fuera de la legitimidad institucional y la viabilidad política, a cualquier otra opción, aspiración o doctrina.³ Esto fue posible, mediante la alternancia en la presidencia de la república de las dos grandes maquinarias políticas, y la repartición bipartidista de los poderes públicos. Este sistema logró una efímera estabilidad y una débil disminución de la violencia política. La práctica del Frente Nacional se extendió durante un período de veintiocho años, en el cual se sucedieron en el poder cuatro gobiernos del Partido Liberal y tres del Conservador. Las reglas del juego establecidas por este acuerdo de poderes, sustentaron un tejido político institucional de aguda connotación clientelista, cooptadora y coercitiva, que usurpó la participación ciudadana y cooptó, de manera creciente, los supuestos presupuestos de la **democracia**.

Comentado [EF2]: Esto lo copié de alguna parte. Citar

El monopolio político liberal – conservador. se articuló en Colombia mediante una suerte de apropiación sistemática de los mecanismos y prerrogativas del Estado por parte de los grupos dominantes, es decir, “la apropiación privada del Estado y sus instrumentos por parte de los empresarios electorales, los que convirtieron en la razón de ser de la clase política, el control de la burocracia y el tesoro público.”⁴ El carácter excluyente, y típicamente corrupto de este sistema, difícilmente podría dejar espacios para una real conciliación política o una inclusión participativa de los amplios sectores populares. La cooptación política y la corrupción administrativa, caracterizaron un sistema altamente excluyente, en el cual los partidos tradicionales devinieron accesorios o conductos del poder.

Véase como agravante de este proceso, el hecho de que, a diferencia de Venezuela, el sistema político colombiano no consiguió, en todo este largo período que se extiende desde 1957 hasta nuestros días, librarse de la presencia guerrillera, elemento que representa un ingrediente fundamental en la crisis política colombiana, y una de las más claras expresiones de la larga crisis de ingobernabilidad que ha

³ Buenarhora p.5

⁴ Buenaahora p. 194 (no es textual, está combinado el texto de varios renglones.)

signado al país. La explicación a este fenómeno, aunque compleja y difícil de resumir en el breve espacio de este trabajo, señala hacia tres premisas fundamentales: La debilidad convocativa distributiva del Estado colombiano, la rigidez política de un bipartidismo explícitamente excluyente e intrínsecamente antidemocrático, y la profunda polarización de la riqueza, con sus remanentes de exclusión, pobreza y marginalidad. Mientras el sistema político venezolano de 1958 consiguió articular un discurso y un conjunto de mecanismos de concertación y afiliación social a la lógica distributiva clientelar del estado petrolero, cuyas poleas de transmisión por excelencia fueron las maquinarias políticas del bipartidismo adeco - copeiano, el sistema político colombiano no alcanzó a articular de forma eficaz la redistribución populista de los ingresos del Estado a cambio de la aceptación de las reglas del juego por los amplios sectores populares. Ello incidió de forma poderosa en su incapacidad para entretejer un consenso democrático delegativo, y un discurso político conciliador.

El sistema político de 1958 en Venezuela, a diferencia del colombiano, surge como resultado de un proceso de negociación entre diferentes fuerzas partidarias de la opción democrático burguesa, en vísperas y tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Estas fuerzas, lideradas por Acción Democrática, avanzaron en la construcción de un proyecto común, que admitía en su propuesta la participación de aquellas organizaciones que asumiesen como suya la búsqueda de la estabilidad democrática, en el marco de la democracia representativa y el sistema capitalista. La intención, la doctrina y los intereses convocadores de estos sectores, quedaron plasmados en un conjunto de pactos fundacionales, explícitos y tácitos, que fueron legitimados tres años después por la Constitución de 1961. Sin embargo, caracterizado por la hegemonía de AD y COPEI, el sistema político de Punto Fijo evolucionó, de forma acelerada, hacia un bipartidismo profundamente excluyente, que alternó en el poder durante décadas a las dos grandes maquinarias políticas. No obstante, la propuesta democrática representativa, conciliada en Venezuela tras la caída de la dictadura, operó, con un considerable nivel de eficacia, como supuesta garantía de las aspiraciones populares a una distribución más equitativa de la riqueza. La nueva hegemonía demoliberal venezolana, sustentó su discurso en tres

pilares fundamentales: el Estado distribuidor, la renta petrolera y la democracia representativa, supuestos garantes de las aspiraciones populares.

En el caso venezolano, como ya hemos afirmado, se consiguió una peculiar legitimación de la exclusión capitalista por la vía de la inclusión, es decir: la distribución clientelar de la renta petrolera, a cambio de la aceptación de las reglas del juego por los desposeídos. El despegue de la economía venezolana, sobre todo durante el período de la gran Venezuela, y la inequitativa pero políticamente eficaz distribución de la renta petrolera, garantizó durante un período relativamente largo la estabilidad democrática, y la efectiva neutralización de los movimientos, partidos y discursos ajenos al statu quo. La capacidad estabilizadora del sistema político venezolano resistió la prueba del tiempo y logró una considerable estabilidad política desde finales de la década de los 60 hasta 1989, momento en que el Caracazo hizo saltar por los aires el mito de la excepcionalidad venezolana. Los grandes saqueos que estremecieron la opinión pública nacional y llamaron la atención del mundo sobre Venezuela, sacaron a la luz la evidencia del agudo deterioro sufrido por su sistema político. El llamado sistema populista de conciliación de elites había dejado de funcionar. La crisis del modelo petrodistribuidor, profundizada durante la década de los 80, dejaba al descubierto dos elementos largamente camuflados en el período de la “abundancia”: la esencia antidemocrática del sistema político, y su dependencia umbilical con la capacidad distributiva del estado benefactor.

A principios de la década de los 80, cuando aparecieron los primeros síntomas de recesión en la economía venezolana, y se produjo la devaluación del bolívar, el Iceberg de la gran Venezuela comienza a sucumbir. La paulatina exacerbación de una aguda crisis política, provocó la demanda, cada vez más generalizada desde la sociedad civil, para llevar adelante reformas importantes tanto del Estado, como del sistema político, en un intento por romper con el monopolio político de AD y COPEI, y de manera transitiva, atacar los flagelos de la corrupción, el clientelismo, y otros males crecientemente repudiados. Sin embargo, los esfuerzos realizados por partidos de oposición, organizaciones vecinales, medios de prensa; entre otros grupos de presión, para llevar adelante cambios importantes en el sistema político venezolano, como la reforma integral del Estado, solo lograron producir algunas reformas políticas

hacia 1988, ante la actitud de resistencia asumida por los actores hegemónicos.⁵ Estas reformas, si bien permitieron una mayor descentralización política, mantuvieron intactas las estructuras de poder del sistema, y en muchos casos operaron como válvulas de escape de las viejas maquinarias partidistas, que se beneficiaron de los liderazgos regionales.

En Colombia, el proceso de transición y reformación política que se desarrolló durante las dos últimas décadas del siglo recién concluido, representó un frágil intento de democratización y modernización del sistema político. Esta transición, cuyo principal fruto fue la Constitución de 1991, se produjo estrechamente relacionado con la intención del monopolio liberal – conservador, de adecuarse a las reglas del juego de la democracia representativa, en consonancia con los nuevos tiempos. Los cambios, que oxigenaron el anquilosado esquema bipartidista en Colombia, no lograron detener el deterioro del sistema político. Aun cuando la democratización favoreció la emersión de otros actores y la diversificación del mapa político electoral, la reforma sirvió más para mostrar el menoscabo de la hegemonía bipartidista, que para construir un esquema pluralista real, que diera cabida a las demandas de los amplios sectores sociales y espacios a su incorporación participativa. Detrás de la supuesta democratización y modernización del sistema, se mantuvo intacto el dominio excluyente de la clase política tradicional y de un orden económico agudamente oligárquico.

La modernización constitucional del país, y las reformas que con ella se efectuaron, dejaron intacto un esquema socio - económico que mantiene inamovibles los problemas de fondo como la miseria social, la corrupción política, la violencia endémica, y el deterioro del medio ambiente⁶. Dicho de otra forma, prevalecen en Colombia las deformaciones e inequidades estructurales que han determinado la violencia política y social de país, y los mecanismos de control oligárquico y cooptación política que los favorecieron.

⁵ López Maya, Margarita: "La protesta popular venezolana entre 1989 – 1993. (En el umbral del neoliberalismo.)" En: Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste. López Maya (Editora) Editorial Nueva Sociedad. Venezuela 1999. p.214.

⁶ Ver: Cárdenas, Miguel Eduardo: "Colombia. La persistente búsqueda de la verdad". En: Nueva Sociedad, N. 175. septiembre octubre del 2001. Caracas. Venezuela. P. 20

La década de los 90 y el nuevo siglo, han visto desgastarse de manera precoz y acelerada el entusiasmo constitucional en Colombia, demostrando en la práctica que el sistema político ha dejado de ser restringido solo en teoría. Escoltado por el incremento de la lucha guerrillera, el accionar de las fuerzas paramilitares, la fragmentación política, la corrupción, el narcotráfico, la violencia, la militarización del país, y la creciente internacionalización del conflicto, la crisis política persiste y se agudiza, mientras la quiebra formal del bipartidismo derrama su hegemonía hacia actores y variables adscritas a sus esferas de influencia y poder. La delegación de los roles políticos en actores supuestamente alternativos, ha resultado poco eficaz. La falta de voluntad política, históricamente manifiesta por los sectores hegemónicos para afrontar la crisis desde presupuestos de cambios sustanciales, no puede conducir sino a un mayor incremento de la simulación política y una postergación de soluciones conciliadas. Ello, en un país donde, la tasa de desempleo abierto se ha duplicado en la década de los 90,⁷ se ha producido un marcado deterioro socioeconómico, y son cada vez más los sectores económica y políticamente marginados.

A pesar de los enfoques que pretenden ignorarlo, la ancestral concentración de la riqueza colombiana, la marginación de los más amplios sectores sociales, la debilidad institucional, el control elitista, caudillesco y oligarca de la política, y sobre todo la pobreza, que han determinado durante años un panorama sociopolítico signado por la ingobernabilidad y la incertidumbre, prevalecen en el panorama socio político colombiano y determinan las tendencias de su evolución. Como consecuencia de ello, el país, marcado por las gruesas cicatrices sociales del narcotráfico, único sostén económico viable para importantes sectores, y por la cronicidad de una larga y sangrienta guerra civil, se aboca cada vez con más fuerza al incremento de la violencia. Ello ocurre, mientras un discurso crecientemente hegemónico pretende olvidar, por ejemplo, que "la recesión que ha experimentado la economía colombiana desde 1996, profundizada por las políticas macroeconómicas abiertamente favorables al gran capital financiero y trasnacional, y la gestión del Estado proclive a los

⁷ Fuente CEPAL: Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2000.

intereses corporativista y oligopólicos, explica los actuales niveles de desempleo, exclusión, pobreza y concentración de los ingresos y la riqueza.”⁸

Ignorando o empujando la connotación de estas aristas, va ganando espacios la retórica de la fuerza como solución a la crisis, apelando a argumentos que encuentren interlocución en una sociedad colocada por años de crisis en un estado de impunidad e inseguridad sin límites. Profundamente desgastada por los largos años de conflictos armados y violencia generalizada, la sociedad venezolana asiste hoy al inicio de un nuevo período en el que el discurso de la fuerza ha calado en importantes sectores de opinión, mientras las ofertas electorales circundan los círculos monolíticos del supuestamente defenestrado bipartidismo. La clase media, indecisa y amenazada en su vida económica y personal, es proclive cada vez más a salidas militaristas. Los medios de comunicación, expresión de los grupos económicos y políticos dominantes, atizan la guerra y defienden sus intereses **hegemónicos**. No hay razones sino para esperar una agudización de la crisis colombiana, un deterioro del sistema político, y una escalada de violencia sin precedente. Con la suspensión de la zona desmilitarizada y las negociaciones de paz, la opción de fuerza se coloca en el vórtice del conflicto, apostándose a una solución destructiva, violenta y de consecuencias imprevisibles.

El discurso de la fuerza, que rebasa los predios de los sectores políticos más reaccionarios, avanza en Colombia impulsado por la retórica de los grupos hegemónicos, los medios de difusión, el supuesto de que se ha agotado la vía de la conciliación, y el respaldo norteamericano. La política “dura” de Estados Unidos con respecto al conflicto colombiano, que adquiere una connotación mayor tras los sucesos del once de septiembre, se traduce en una escalada que viene marcando e imponiendo sus pautas, sus criterios, sus raseros, simplificando las lecturas del proceso colombiano al punto de la satanización y santificación de las partes, pero sobre todo, subestimando las condicionantes estructurales de la crisis, y la magnitud de los cambios que ella demanda. Esta tendencia se expresa en un incremento de la ayuda militar norteamericana, y la creciente obstrucción de las vías de comunicación y conciliación entre el gobierno colombiano y la insurgencia.

Comentado [EF3]: Buscar cita.

⁸ Sarmiento Anzola, Libardo: Plan Colombia, conflicto e intervención. *Nueva Sociedad* N. 172. marzo –abril 2001. p. 171-172

Sobre la connotación de la injerencia norteamericana en el conflicto colombiano, el profesor Juan Gabriel Tokatlian, en un artículo sobre el Plan Colombia y la región andina, recientemente publicado, señaló: “es evidente el incremento de la intervención indirecta de Washington en los asuntos colombianos y no descartable la amenaza palpable y el uso explícito de la fuerza de su parte en el largo plazo para forzar una eventual solución a la guerra.” Según Tokatlian, esto no significa que se esté a las puertas de un intervencionismo unilateral de EEUU en Colombia, pues Washington, “continuará intensificando su intervención indirecta, por medio de una mayor asistencia militar, y de llegar a una acción concreta, deberá hacerlo, por un mecanismo multinacional o multilateral”.⁹ La lectura de este análisis, en un artículo por demás muy interesantes, me hace retomar un debate que va más allá de la semántica y la retórica, para encarnar un dilema fundamental en la temática que nos ocupa. ¿Que vamos a entender por intervención directa de Estados Unidos, en el conflicto colombiano? Si solamente entenderemos por intervención directa, el arribo masivo de las tropas norteamericanas a tierras colombianas, al estilo de Irak o Afganistán, podemos afirmar que no es ese el escenario que parece estarse conformando en el corto plazo. Coincido con el profesor Tokatlian en que una escalada intervencionista de Estados Unidos en Colombia, de esa magnitud, deber ir precedida de consiliábulos y negociaciones a nivel regional, e internacional. Sin embargo, creo que circunscribir el concepto de intervención directa a la presencia de grandes tropas y efectivos militares de Estados Unidos en el país, puede conducir a la opinión pública a la espera, en la portada, de alguien que ya está sentado al final de la casa. La importante presencia de asesores y militares norteamericanos en Colombia, la ayuda logística, y el despliegue de efectivos supuestamente relacionados con la lucha contra las drogas es, en términos modernos, una forma de intervención directa. Lo que está pendiente en Colombia, es una escalada intervencionista que ya comenzó.

Un elemento a tener en cuenta, en este análisis, es el hecho de que la creciente ayuda militar, logística y política que brinda el gobierno norteamericano al ejército de Colombia, va conformando un panorama que pudiese apuntar, en el mediano o largo

⁹ Tokatlian, Juan Gabriel: “Colombia, el Plan Colombia y la región andina. ¿Implosión o concertación?” Nueva Sociedad N. 173. Mayo – Junio 2001. p. 134

plazo, a un desbalance en la correlación de fuerzas que ha caracterizado al conflicto colombiano en un largo período de tiempo. Ello, por supuesto, en detrimento de las guerrillas.¹⁰ Esta posibilidad, determina un incremento de la beligerancia, y cierra los pocos caminos que parecen seguir existiendo hacia la mesa de diálogo.

Desde la perspectiva regional, se observa una baja capacidad de contención ante la ofensiva de Washington para imponer nuevas condiciones que signifiquen privilegiar su agenda de seguridad hemisférica.¹¹ Las favorables condiciones para una mayor influencia norteamericana en la región, salvo excepciones, son un hecho. La regionalización del conflicto colombiano, es hoy ya muy difícil de evitar.

En Venezuela, la perspectiva transformadora del proceso chavista ha implicado desde los primeros momentos del ascenso electoral de Chávez en 1997, agudas y continuas campañas en su contra, con las cuales la oligarquía venezolana, e importantes sectores de las capas altas y medias, fundamentalmente, se han propuesto remarcar sus territorios, sus prerrogativas, sus áreas de influencia, en una clara intención de atacar, anticipadamente, cualquier intento de transformar un orden económico y social en el marco del cual ha descendido a niveles de pobreza más del 80 por ciento de los venezolanos, sobre uno de los subsuelos más ricos de la Tierra.

Devastado el sistema puntofijista, desplazados de sus prerrogativas los partidos hegemónicos, aprobada la nueva Constitución y relegitimados los poderes públicos, la crisis política venezolana existe más allá del sistema puntofijista, muchas de cuyas perversas manifestaciones se expresan hoy en el panorama político que vive el país, como parte de la cultura política, la tradición clientelista, las prácticas cotidianas de viejas y nuevas castas políticas, corroyendo el camino hacia la conformación de una nueva hegemonía. Sobre las sólidas bases estructurales que determinaron la inoperancia y caducidad del sistema, la vieja clase política, en alianza con importantes sectores de la burocracia y actores emergentes de muy diverso signo, apuesta, en una larga guerra de desgaste, al deterioro del proyecto y el discurso chavistas, y a la recuperación del viejo poder de convocatoria. La revolución bolivariana, por su parte, frente al peligro real de perder paulatinamente sus bases de

¹⁰ En este punto debemos recordar, los conocidos vínculos entre el ejército colombiano y las fuerzas paramilitares, pues ello nos brinda una perspectiva importante sobre el debate en torno a la correlación de fuerzas en Colombia.

¹¹ Vargas Mesa, Ricardo: Drogas, seguridad y democracia. *Nueva Sociedad* N. 173. Mayo – Junio 2001. p. 125
Sociólogo colombiano

apoyo, se encuentra hoy ante la disyuntiva de avanzar hacia una radicalización del proceso de cambios, más allá de la reforma política, a contrapelo de la correspondiente agudización de acciones opositoras, y los crecientes signos de injerencia política que respecto al proceso van manifestándose en el ámbito internacional.

Maniatado por la persistencia de importantes mecanismos de control político oligárquico, que alcanza a los órganos de andamiaje superestructural del Estado, los aparatos de información y comunicación, las elites empresariales de Fedecámaras y el aparato sindical, entre otros, el sistema político venezolano post puntofijista, se debate entre dilemas muy complejos que, de no ser resueltos, pudieran conducir a un descalabro del proceso revolucionario y, en el mejor de los casos, a perder, una vez finalizado el período de gobierno chavista, las cuotas de poder alcanzadas en los comicios anteriores, y con ellas, las perspectivas de cambio. Por otro lado, las medidas populares tomadas por el gobierno no han tenido el efecto esperado en las capas más humildes de la población, impactadas, además, por las acciones de sectores burocráticos opuestos a los cambios y el acoso de los medios masivos de difusión.

En medio de marchas y contramarchas, las fuerzas partidarias del chavismo, y la oposición, pugnan y se enfrentan en un proceso en medio del cual la oposición da muestras de recuperación organizativa, luego de varios años de total dispersión estratégica e incapacidad convocativa. Apostando al desgaste del chavismo, y con un protagonismo evidente de FEDECAMARAS, la CTV y la alta jerarquía católica, la oposición parece apostar a una mayor presencia e incidencia de actores políticos que, “en solitario”, logren alcanzar un liderazgo capaz de atraer, en torno al consenso antichavista un efectivo consenso popular.

La democratización del sistema político, que alcanzó peso constitucional en la nueva Carta Magna, y la voluntad aglutinadora del gobierno chavista, no han bastado para revertir los niveles de dominio político oligárquicos que persisten a pesar de los cambios. El reto del chavismo, extraordinariamente difícil en un contexto histórico muy adverso, parece señalar hacia el logro de una incorporación activa, y políticamente comprometida de las bases sociales del cambio, a la revolución, pero

ello resulta especialmente difícil, sin una plataforma encaminada a transformar, más allá de políticas compensatorias, un orden económico y social intensamente excluyente, base fundamental del poder político opositor.

Con relación a este proceso, la posición norteamericana, que pasó en 1998 de un explícito rechazo a la candidatura de Hugo Chávez, a un reconocimiento de su triunfo y de su gobierno, y una actitud generalmente ponderada y discreta frente a los cambios puesto en práctica por el gobierno, hoy evidencias síntomas de cambios en su estrategia. Las crecientes declaraciones, sobre todo del Departamento de Estado, que insinúan o explicitan, según el caso, la posición norteamericana favorable a una alternativa política al gobierno de Hugo Chávez, echa leña al fuego de las contradicciones y da un fuerte espaldarazo a las fuerzas de la oposición.

A modo de conclusiones.

Los intereses políticos de los grupos tradicionalmente hegemónicos, apostados en franco zafarrancho de combate, según las peculiaridades del caso, en Venezuela y Colombia, como baluartes de un orden estructural oligárquico y antidemocrático, le confieren a las crisis políticas de esos países un carácter de cronicidad. La ingobernabilidad será endémica, mientras endémicas sean la pobreza, la marginalidad y la deformación estructural. La falta de un sentido de conciliación que incorpore la redistribución de la riqueza como premisa para la paz social, determina, como tendencia histórica, un incremento de la beligerancia política, de la violencia y la injerencia exterior.